

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Eyder Patiño Cabrera

Magistrado Ponente

AP4530-2014

Radicación N° 44.286

(Aprobado Acta N° 254)

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014).

MOTIVO DE LA DECISIÓN

La Sala se pronuncia sobre la definición de competencia propuesta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín para conocer el recurso de apelación propuesto por el defensor de Leonardo Fabio Gómez Berrío frente a la sentencia condenatoria emitida en su contra por el Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Dabeiba, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

ANTECEDENTES

1. Del escrito de acusación se extrae que, el 16 de julio de 2012 en la vereda «Pegadó» del municipio de Dabeiba, miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón de Ingenieros No. 17, le incautaron a Leonardo Fabio Gómez Berrío una sustancia que al ser sometida a la prueba PIPH arrojó como resultado positivo para cocaína o

derivados, con un peso neto de 525 gramos, razón por la que procedieron a aprehenderlo.

2. Al día siguiente¹ se llevó a cabo ante el Juzgado 2º Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de esa ciudad audiencia de legalización de captura y formulación imputación en contra de Gómez Berrío por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, quien se allanó a los cargos imputados. Asimismo, se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva².

Al momento de verificar la aceptación de la responsabilidad penal, el imputado se retractó de lo manifestado, lo cual fue avalado por el juez de conocimiento.

3. El 7 de diciembre de esa anualidad³ la Fiscalía 50 Seccional de Dabeiba presentó escrito de acusación en contra del procesado y el 29 de enero de 2013⁴ se adelantó vista pública de formulación ante el Juzgado Promiscuo del Circuito con funciones de conocimiento de esa ciudad.

4. El 10 de mayo de 2013⁵ el referido Juzgado condenó al acusado a 98 meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

5. Contra esa determinación, el defensor del sentenciado interpuso recurso de apelación, razón por la que las diligencias fueron remitidas al Tribunal Superior de Antioquia y mediante proveído del 28 de mayo de 2014⁶ el Magistrado Ponente ordenó enviar el expediente a sus homólogos de la ciudad de Medellín, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo PSAA14-10145 del 28 de abril de esa anualidad emitido por el Consejo Superior de la Judicatura⁷.

6. En auto del 23 de julio de 2014⁸ la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín se declaró incompetente para conocer las diligencias, en tanto estiman que el Consejo de la Judicatura, desconoció lo establecido en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, con la modificación introducida por la Ley 1285 de 2009, donde se indica que al adoptar medidas

de descongestión se debía respetar «la competencia territorial», norma que hace parte del bloque de constitucionalidad. Por tal motivo inaplicaron dicho Acuerdo y manifestaron su incompetencia para desatar la alzada, dado que los hechos ocurrieron fuera de su jurisdicción y no ha operado el cambio de radicación.

En consecuencia, remitieron la actuación a esta Corporación para que definiera la autoridad que debía conocer este asunto.

CONSIDERACIONES

La Sala reiterará la postura plasmada en la providencia AP253-2014, toda vez que al interior de la misma se resolvió un asunto de idéntica connotación donde estuvieron involucrados los mismos despachos judiciales de la presente actuación. En ese proveído, dijo:

(...) En orden a adoptar la decisión que en derecho corresponda, impera recordar en primer lugar que el concepto de bloque de constitucionalidad, fue sistematizado en la sentencia C - 225 de 1995, pronunciamiento reiterado en la jurisprudencia constitucional posterior sobre la materia, en los siguientes términos:

El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu.

La evolución del instituto jurídico en comento implicó, entre otras, la distinción

entre el bloque de constitucionalidad en sentido estricto y en sentido lato. El primero, «se encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional, los que se reducen al texto de la Constitución propiamente dicha y a los tratados internacionales que consagren derechos humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción»; en tanto el segundo «estaría conformado no sólo por el articulado de la Constitución sino, entre otros, por los tratados internacionales de que trata el artículo 93 de la Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, por las leyes estatutarias». (Sentencia C - 191 de 1998. Énfasis propio).

La integración de las leyes estatutarias al bloque de constitucionalidad no es una regla general sino una excepción, que opera exclusivamente cuando una disposición de rango superior así lo indica. El máximo Tribunal Constitucional lo ha precisado de la siguiente manera:

De los criterios jurisprudenciales expuestos, se destaca el hecho de que algunas leyes pueden integrar el mencionado bloque de constitucionalidad en sentido lato, siempre que la propia Carta lo haya ordenado, en forma directa y específica, de manera que sus mandatos sean respetados por las leyes ordinarias y logren instituirse como parámetros de un control de constitucionalidad sobre las mismas.

[...]

De manera pues que, el apoyo del demandante en el fallo de constitucionalidad C-191 de 1998, para afirmar categóricamente que la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia” -en los artículos que el actor menciona y en forma determinante- integra el bloque de constitucionalidad, fue equivocado por no haber existido en la misma referencia ni análisis pertinente que permitiera llegar a esa conclusión.

[...]

Con base en los criterios jurisprudenciales mencionados y el contenido normativo de esas preceptivas legales, la Sala concluye que las mismas no pueden invocarse como transgredidas por la disposición sub examine, en cuanto no integran el bloque de constitucionalidad lato sensu, pues debe insistirse en que no todo el contenido de una ley estatutaria es apto para ostentar esa condición, sólo es viable a través de un mandato expreso del Constituyente de 1991 que apunte hacia esa dirección y en la Carta Política no se observa canon alguno que las reconozca como reglas de valor constitucional. (Sentencia C - 708 de 1999. Subrayas propias).

El mismo error detectado en aquella oportunidad por la Alta Corporación se presenta en la interpretación ofrecida por la Sala Penal del Tribunal de Medellín, pues su planteamiento se basa en que el Acuerdo PSAA14-10145 del Consejo Superior de la Judicatura es inconstitucional, en tanto desconoce el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, que en virtud de la modificación introducida por el canon 15 de la Ley 1285 de 2009, establece: «el Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la competencia territorial podrá redistribuir los asuntos que los Tribunales y Juzgados tengan para fallo asignándolos a despachos de la misma jerarquía que tengan una carga laboral que, a juicio de la misma Sala, lo permita» (resalto fuera del texto original).

La conclusión obtenida es errónea, dado que parte de la equivocada premisa, según la cual la disposición en comento hace parte del bloque de constitucionalidad. Como se expuso, aunque esté contenida en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, para que fuera tomada como criterio de constitucionalidad tendría que existir autorización expresa en la Carta Política, pero ésta no fue consagrada en ningún apartado del texto superior.

Por lo tanto, cuando el Tribunal de Medellín optó por inaplicar el acuerdo mencionado haciendo uso del control difuso de constitucionalidad, también denominado excepción de inconstitucionalidad; en realidad no lo confrontó con una norma de rango constitucional, sino legal.

Si ello es así, como en efecto lo es, la consecuencia lógica es que no le estaba dado a aquella colegiatura desconocer el contenido del acto administrativo emanado del Consejo Superior de la Judicatura, pues no le correspondía decidir si se ajustaba o no a las previsiones de la Ley 270 de 1996, ya que la facultad para tal efecto es del resorte exclusivo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En el mismo sentido, el incidente de definición de competencia no es el escenario pertinente para efectuar el juicio de legalidad de los acuerdos emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura, dado que ello desbordaría el ámbito de injerencia de la Sala de Casación Penal, e invadiría indebidamente el de la justicia contencioso administrativa.

En desarrollo de lo anterior, en pretéritas oportunidades se ha reconocido que «el Consejo Superior de la Judicatura ostenta la expresa facultad para reasignar los procesos cuando la congestión de determinados despachos judiciales lo ameritan», por lo que los acuerdos a través de los cuales se materializa dicha función, ostentan el rango de normas atributivas de competencia (Cfr. CSJ SP, 22 Ene 2014, Rad. 38725).

En el presente asunto, el artículo 1º del Acuerdo PSAA14-10145 del Consejo Superior de la Judicatura, ordenó «trasladar 260 procesos en estado de fallo de Ley 906, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, a excepción del despacho de la Dra. Nancy Ávila, del más reciente al menos reciente, para ser distribuidos entre 13 despachos de magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín».

En consonancia con lo anterior, el Acuerdo PSAA14-10145 se encuentra vigente y es de

obligatorio cumplimiento, ya que su legalidad se presume hasta tanto el juez natural no resuelva lo contrario. En acatamiento de ese mandato, no es posible exceptuar la regla general de competencia territorial para la resolución de las 260 actuaciones, entre las cuales se encuentra la que motiva el presente pronunciamiento.

Comoquiera que no están dados los presupuestos para resolver el incidente de definición de competencia propuesto, la Sala remitirá las presentes diligencias a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín para que cumpla el renombrado Acuerdo. Esta determinación será comunicada a su homóloga con jurisdicción en el departamento de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

Primero. Abstenerse de pronunciarse sobre el incidente de definición de competencia propuesto por el Tribunal Superior de Medellín.

Segundo. Devolver la actuación a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, para que dé estricto cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo PSAA14-10145 del Consejo Superior de la Judicatura.

Tercero. Comunicar la presente determinación a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia.

Contra este auto no procede recurso alguno.

Cópiese y Cúmplase

Fernando Alberto Castro Caballero

José Luis Barceló Camacho

José Leonidas Bustos Martínez

Eugenio Fernández Carlier

María del Rosario González Muñoz

Gustavo Enrique Malo Fernández

Eyder Patiño Cabrera

Patricia Salazar Cuéllar

Luis Guillermo Salazar Otero

Nubia Yolanda Nova García

Secretaria

1 Cfr. Folio 4 - carpeta No.1.

2 Mediante oficio No. 0045 del 20 de mayo de 2013, el Director de la cárcel de Apartadó informó que en esa fecha el procesado se fugó de ese establecimiento penitenciario. Cfr. Folio 56 - ibídem.

3 Cfr. Folios 21 a 25 - ibídem.

4 Cfr. Folio 31 - ibídem.

5 Cfr. Folios 71 a 79 - ibídem.

6 Cfr. Folio 93 – ibídem.

7 ARTÍCULO 1º.- Traslado de Procesos Penales.- Trasladar 260 procesos en estado de fallo de Ley 906, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, a excepción del despacho de la Dra. Nancy Ávila, del más reciente al menos reciente, para ser distribuidos entre 13 despachos de magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

8 Cfr. Folios 94 a 98 – ibídem.